

Breve historia de los impuestos sobre juegos

Mariano Peset Reig

Catedrático de Historia del Derecho

SUMARIO

- | | |
|---|-------------------------------------|
| I. Los juegos son un delito | IV. Una hipótesis final |
| II. La lotería como excepción | V. Orientación bibliográfica |
| III. De nuevo sobre el juego y la política | |

Los juegos son un delito

La historia de los impuestos sobre juegos es corta, todo lo más se remonta al siglo XVIII con la aparición de la lotería nacional. Con anterioridad apenas puede descubrirse algún rastro que suponga una actitud permisiva de los poderes públicos acerca de este esparcimiento: el juego es una actividad que debe ser reprimida, no gravada...

Hacia 1636 se estableció en Castilla el estanco de los naipes —una de las denominadas siete rentillas, junto a la pólvora, el azufre, aguardiente, nieve, etc.— que gravó en origen la fabricación de las barajas. Pagaban una cantidad, más o menos elevada según la calidad. En ningún caso se gravaba el juego, sino la fabricación de aquellos naipes que servían de usual modo de distraerse, sin que se asociasen a envites o apuestas, que constituían en sentido estricto los juegos. El jugar estaba prohibido según las leyes en el antiguo régimen. En la *Nueva recopilación* castellana se recogían viejas prohibiciones para que «ningunos de los nuestros reinos sean osados de jugar dados ni naipes en público ni en escondido» (8, 7, 2 Juan I en 1387 y los Reyes Católicos en 1476); la prohibición es confirmada en Cortes de Toledo de 1480, sin más excepción que quienes juegan sólo «fruta, vino o dinero para comer o cenar luego...» (8, 7, 5). También se permitía hasta treinta ducados en el juego de la pelota o, en cualquier otro hasta dos reales (8, 7, 9 y 11). Felipe II fue contrario al juego, dictando copiosa legislación contra su práctica... En 1771, Carlos III recoge en una real pragmática toda la legislación anterior, incrementada por Felipe V y sus hermanos Luis I y Fernando VI, contra los juegos «de embite, suerte y azar ...». Enumeraba los prohibidos y los permitidos —estos con apuesta menor a un real y con máximo de pérdida de los treinta ducados, castigaba a los reincidentes y sujetaba a todos a la jurisdicción real; conminaba a tabernas, figones, mesones, botillerías, cafés y casas públicas, salvo damas, ajedrez o tablas reales... Había sabido con desagrado que «en la corte y demás pueblos del reino se han introducido y continúan varios juegos, en que se atraviesan crecidas cantidades, siguiéndose gravísimos perjuicios a la causa pública con la ruina de muchas casas, con la distracción en que viven las personas entregadas a este vicio y con los desórdenes y disturbios que por esta razón suelen seguirse...» (*Nueva recopilación*, 8, 7, 18).

La situación era bien conocida. José Berní en su *Práctica criminal*, Valencia, 1765, capítulo XXXVIII, escribe con cierta gracia, que la *Recopilación* castiga los juegos prohibidos y «sin embargo, en algunos lugares hay aucas, rifas, dados, carteta, zacanete, topetón, embites, y por remate, tabas: muchos que deben poner remedio o hacen el sordo o no lo saben, y yo callo, pues no me importa, y solamente por caridad diré: que es lástima que hombres menestero-

sos jueguen por divertimento lo que no tienen; y que hombres poderosos jueguen muchos caudales... y no pongan un real en la dicha de conseguir la Gloria, a saber: socorriendo a la pobre viuda, a la expuesta doncella, al pobre enfermo, al pariente mendigo y al próximo necesitado».

Sin embargo, es evidente que, por detrás de la norma, existe el juego; es más, las autoridades, en algún caso, cobran cantidades por hacer la vista gorda. En un dietario de Isidro Planes, se vislumbra esa realidad, en los años de ocupación de Valencia por las tropas de Felipe V. Las nuevas autoridades borbónicas cobran por tolerar las casas de juego, secretamente las gravan en su particular beneficio...

También sabemos que, al crearse la policía en la revolución francesa, con el omnipotente Fouché a la cabeza, se usó de este medio para disponer de fondos. Para pagar espías necesitaba mucho dinero, que extraía «secretamente por tasas establecidas sobre casas de juego y otros círculos» —según se escribe en sus pretendidas *Memorias*, (capítulo XV, primera parte).

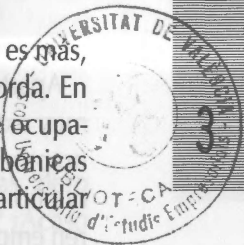
Pagaba el juego, es verdad, pero la sociedad y el derecho mantenía su condena. En los códigos liberales penales se estableció como delito, que permaneció intacto a lo largo de más de un siglo... Esta situación —condena legal junto a cierta tolerancia— va a ser el principio esencial español a lo largo de su historia. Sólo en los últimos tiempos ha sido sustituido por otro contrario: licitud de toda clase de juegos e impuesto sobre los mismos. Una especie de impuesto «voluntario», en tanto que las personas pueden jugar o no, análogo al que, desde hacía muchos años gravaba la lotería.

Ahora bien, el delito de juego se limitó, al principio: sólo estaban prohibidos los juegos en locales públicos o casas de juego, dejando sin condena lo que jugasen los particulares en sus domicilios o en tertulias privadas. Sin embargo, el delito se fue extendiendo o atacando por vías gubernativas a lo largo de su historia liberal, en el siglo pasado y en este.

El principio de condena de los juegos está ya en el código penal de 1848 —obra de Juan Francisco Pacheco, su comentador—. Castigaba a los banqueros y dueños de casas de juego de suerte, envite o azar y a los expendedores de rifas no autorizadas, así como a los jugadores que acudieran a dichas casas. El castigo a los jugadores se había introducido en la reforma de 1850, hecha por el gobierno Narváez, como reflejo de su temor ante la revolución del 48 en Francia; a Pacheco no le gustaron en general las modificaciones introducidas en el articulado de su código...

En el año 1853 una real orden de 25 de mayo, abría otras posibilidades de corrección en la vía gubernativa, contra aquellos:

Entre los elementos de corrupción que más desastrosas consecuencias producen en el seno de la sociedad, ninguno tan trascendental y de resultados más funestos como el de los juegos de suerte, envite y azar, porque no sólo



afectan a la fortuna y comprometen la paz y la dicha de las familias sino que relajan las costumbres, pervierten y extravían los más nobles instintos y son el foco inmundito de donde salen gran parte de los odios y crímenes que manchan desgraciadamente los anales de nuestra época...

Aparte la retórica que contiene, hay, en la sociedad de la época, una repulsa muy extendida, pues se conminaba no sólo con las penas del código y cuando no procediesen con correcciones gubernativas y la publicación del nombre del dueño de la casa y, si hay reincidencia, de los jugadores. Si los jugadores fueren empleados públicos se anotaba en el expediente y se ponía en conocimiento del ministerio. Otra orden de 14 de marzo de 1855, castigaba al militar que estuviese en casa de juego con dos meses de arresto en un castillo. La tolerancia se había convertido en vigilancia policial...

Reales órdenes sucesivas reforzaron esa vía gubernativa, demostrando la existencia continuada del juego. Una de 20 de octubre de 1866 incitaba a los gobernadores civiles a adoptar «las disposiciones más terminantes y enérgicas para que los alcaldes de los pueblos de esa provincia, y todos los funcionarios de vigilancia se ocupen muy especialmente en la averiguación de los puntos en que existan o se instalen juegos prohibidos, y que se persiga este vicio sin contemplación de ninguna especie...».

En los años de la restauración canovista, a partir de la proclamación de Alfonso XII, se creyó más oportuno volver los ojos hacia los tribunales: era un delito y por tanto ellos debían juzgarlo. La real orden de 4 de diciembre de 1877 encargaba a los gobernadores que desplieguen el celo acostumbrado en la persecución del delito de juego en la forma que establece la ley de enjuiciamiento criminal —se refiere a los arts. 191 y siguientes de la ley de 1872, que concuerdan con los 283 y siguientes de la L. E. C. de 14 de septiembre de 1882—. Pero, seguía estableciendo la real orden, se abstendrán de imponer multas en lo sucesivo, sino deberán comunicarlo a los tribunales y del ministerio...

Dos días después otra real orden pone en manos del ministerio fiscal la continuidad de esta nueva política, pues «para que esta medida produzca los saludables efectos que S.M. desea, no basta que los agentes de la Administración ejerzan con la solicitud las atribuciones que les competen, como parte que son de la policía judicial; es preciso también que el ministerio fiscal promueva con incesante diligencia las acciones criminales que nazcan de esta clase de actos punibles, y que los juzgadores impongan con inflexibilidad rigor el condigno castigo... El 13 de enero de 1879 se recuerdan estas órdenes, para extirpar el juego, «el más funesto y transcendental de todos los vicios que la moral execra y la ley reprime».

El efecto de estas normas fue debilitar la persecución contra el juego, por lo que se dictaron nuevas disposiciones para avivar la acción policial y las actua-

ciones judiciales... No obstante la condena de los juegos, hubo siempre tolerancia hacia los mismos; una situación ambigua que propiciaría la corrupción y cierta delincuencia añadida...

La lotería como excepción

Condena del juego, más o menos profunda, hasta casi nuestros días, pero con una excepción, la lotería. ¿Cómo casar dos actitudes tan diferentes? ¿Acaso la administración del Estado limpiaba de su sentido negativo a aquellos sorteos y premios? Podía evitar los fraudes, pero el juego no se prohibía por esta razón —en los códigos liberales se penaban aparte, como estafa, los fraudes para asegurar la suerte...

Un economista francés, Jean Baptiste Say rechazaba las loterías como vicio funesto a la tranquilidad de las familias y a la prosperidad del Estado: hace perder el dinero y trastoca las costumbres.

Pero los gobiernos, desde Carlos III, justificaron en razones piadosas para compensar la quiebra del principio. Sus ingresos se destinarían a huérfanas de militares y otras (30 de septiembre de 1763). Tal vez pensaron establecer una vía menos peligrosa para quienes tuvieran el deseo de jugar. Mendizábal, señalaba incluso, el valor de consuelo que significaba, ya que mediante corto sacrificio se compra una halagüeña esperanza, cordial socorro de sus necesidades... Añadía que en los países en donde estaban prohibidas, como Francia o Prusia, compran en el extranjero y tributan, por tanto, a países ajenos... (Memoria a las Cortes en 1837). En cambio, para Martínez Alcubillas, autor del *Diccionario de la Administración*, en 1858, no podían admitirse, cualquiera que fuesen las circunstancias,

¡cómo justificarse nunca a los ojos de la moralidad pública que al paso que se condenan tan severamente y con tanta justicia los juegos de suerte y azar, los gobiernos, lejos de pensar en la abolición de las loterías, se esfuerzan cada vez más en su fomento..!

Ciertamente había una desarmonía difícil de legitimar: el Estado despenalizaba un juego en su beneficio. ¿Era por razones recaudatorias? Su producto no ha sido demasiado. ¿Una espita al deseo de jugar o la venta de una esperanza?

En una edición posterior —la cuarta— sostenía Martínez Alcubillas análogas ideas, esperando que pronto habría de abolirse, en cuanto se equilibraran los presupuestos del Estado con otros ingresos... La realidad fue muy distinta.

Los liberales continuaron con gusto la creación de la lotería por Carlos III; por orden de 23 de noviembre de 1811 la renovaron con el nombre de *lotería nacional*, extendiéndola después a todo el territorio y países de Ultramar. En

5 de noviembre de 1812 se establecen dos sorteos y en 5 de febrero de 1813 se conceden dos sorteos más a beneficio del montepío militar —eran tiempos de la guerra contra el Francés y, además, se afectaban sus resultados como es usual para limpiarla su posible contaminación con juegos de suerte o envite—. Al restaurar Fernando VII el poder absoluto, nada cambió; son años de fuerte crisis con las reformas en la hacienda de Martín de Garay, que procuró incrementarla, prohibiendo rifas particulares, salvo aquellas que, por excepción, fuesen autorizadas; o con el incentivo de eximir los premios de la contribución general (9-XII-1817).

Paulatinamente se fue convirtiendo en «un recurso ordinario del presupuesto de ingresos del Estado, el cual garantiza el pago de premios» (art. 1 de la Instrucción general de loterías de 3 de diciembre de 1882). La mayor parte de las normas que se dictan se refieren a la organización del servicio...

Junto a la lotería nacional surge un sector conectado, como son las rifas, que podrían ser competencia para el monopolio de lotería. Quizá es en estas donde empieza a establecerse un auténtico gravamen o impuesto, ya que en la lotería nacional, pagados los premios y satisfechos los gastos, el resto se ingresaba en el tesoro: principio establecido ya por la real orden de 21 de agosto de 1817. Más tarde se refundió con los presupuestos generales del Estado, de modo que no significaba, tan sólo el sobrante de un sector autónomo...

Pero volveré a las rifas. Se prohibieron en 27 de octubre de 1815, 22 de enero de 1817, 7 de enero de 1819, 27 de agosto de 1838 y 19 de octubre de 1843. La lista es expresiva de una actitud constante, que sólo admitía la autorización de rifas en beneficio de los establecimientos de beneficencia y con pago del 25 por ciento de los billetes que se vendan como tributo, según las últimas citadas, que se continúan por la real orden de 2 de julio de 1849. La afectación a un fin piadoso sirve para su legitimación y limpieza...

Germán Orón ha estudiado con cuidado esta legislación y advierte un cambio profundo en el decreto de 29 de abril de 1865, que ampliaba la posibilidad de celebrarlas como «premio al trabajo, alivio a la desgracia y fomento a la industria nacional». En estas fechas se fijó la parte destinada a ganancias en el 70 por ciento (Ley de presupuestos de 3 de agosto de 1866), y hubo algunas reformas más...

En los años de la Gloriosa se cambió radicalmente el sistema. El decreto de 10 de julio de 1869 y, sobre todo, el de 1 de abril de 1871 dejó que se celebrasen sin autorización previa todas las rifas de bienes muebles, inmuebles o semovientes, pero se prohibieron las que tenían premios en metálico o en efectos públicos (art. 1º). De esta forma, la lotería quedaba preservada, pero se permitían rifas; algunos pensaron que la revolución del 68 —la Gloriosa— debió hacer desaparecer la lotería, pero las urgencias del tesoro y la comodidad de estos ingresos... Por lo demás, las rifas en especie aludidas pagarían el cinco por ciento de los billetes vendidos al Estado, y, si cayese el premio en alguno

no vendido, el cinco por ciento de los billetes emitidos (art. 3.º). Los establecimientos de beneficencia, así como las corporaciones locales estarían exentos de ese gravamen (art. 4.º y orden de 6 de junio de 1873).

La restauración volvió al viejo sistema de licencia previa que aseguraba, sin duda, la percepción del impuesto. Este se subía, a un cuatro por ciento de todos los billetes en las de beneficencia o utilidad pública y el 25 por ciento en las particulares (arts. 4.º y 5.º del real decreto de 20 de abril de 1875). Se limitaba, como antes a inmuebles, muebles y semovientes y se ponían en combinación con la lotería nacional: es decir se mantenía el monopolio de la lotería nacional sobre premios en metálico y, de otro lado, se aseguraba contra el fraude que pudiera darse en las extracciones. En una instrucción posterior se regulaban con minucia los requisitos sobre autorizaciones, forma de imprimir los billetes y las menciones que deben de llevar. Cualquier irregularidad sería perseguida por los tribunales especiales de contrabando y fraude. Tal vez, conviene destacar la definición de las que son de beneficencia o de utilidad pública —dos conceptos distintos:

...se consideran rifas de *beneficencia* las que con destino a los establecimientos benéficos celebren los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales y las Corporaciones cuya existencia legal esté reconocida; de *utilidad pública* las que se verifiquen por Corporaciones municipales o provinciales, Sociedades de Fomento u otras análogas de carácter oficial, con aplicación a obras de reconocida utilidad pública, y *particulares* todas las demás, (art. 3.º de la instrucción de 25 de abril de 1875).

Las de sociedades religiosas o corporaciones de esta índole se reputaban particulares (art. 9.º). En algún momento, la ley de presupuestos de 21 de julio de 1876, se autorizó al gobierno para establecer un impuesto sobre los premios —un descuento que no llegara al diez por ciento—. Pronto se hubo de desistir, pues, de un lado podía desviar a los jugadores y, por otro, no tenía sentido si era la propia administración quien establecía los premios. Si en algún momento se fijó el importe proporcional de los premios, se derogó de inmediato (Ley de presupuestos de 3 de agosto de 1866, derogada por el decreto de 12 de diciembre de 1868).

El monopolio de la lotería —el control de las rifas— se procuró en estos años de la restauración. Se prohibió la introducción de billetes de loterías extranjeras (real orden 21 de julio de 1877) o se persiguió las rifas no autorizadas (orden de 9 de junio de 1881). Mayor importancia posee la ley de 31 de diciembre de 1881 que indemnizaba a las rifas con carácter permanente autorizadas hasta el día; en el presupuesto del Estado se incluían partidas para que se pagase por el perjuicio, incluso se acordaban pagos anuales a algunas de las que ahora desaparecían. Se buscaba que la lotería nacional no tuviera contrincan-

tes, a través de su posición única, en los premios metálicos, y la limitación de las rifas de premios en especie...

Sin embargo, la lotería y las rifas gozaban de un estatuto de legalidad. Mientras los juegos eran prohibidos, se proporcionaba una vía de esperanza a través de la lotería... ¿Son dos realidades diferentes? En un caso se unían todas las desgracias a su existencia —en los juegos—; en el otro, con la garantía del Estado, se evitaban fraudes y, al no ser necesario reuniones y casas de juego, no se consideraba peligrosa.

Ahora bien, el juego con su inmediatez, con su posibilidad de alcanzar una fortuna era un mundo diferente. Las clases altas podían permitirse el lujo de acudir a los grandes centros de juego internacional, en donde, junto a la ruleta, lucía su elegancia o mostraban su dinero. Incluso en las grandes ciudades, la tolerancia era regla, especialmente en casinos o círculos de gentes acomodadas —no se necesitaba tener una gran fortuna para poder jugar y latir frente a la baraja o con otras formas de juego.

De nuevo sobre el juego y la política

En la legislatura de 1911-1912 toma la palabra en el congreso el diputado Pablo Iglesias y, entre otros asuntos, planteaba el problema del juego en Barcelona, «porque en aquella ciudad ha alcanzado proporciones verdaderamente espantosas; ha habido suicidios, quiebras, ruina de familias, todo ocasionado por la licencia que en el juego reina. Allí ya no es un solo establecimiento el autorizado, sino que son muchos, y sobre esto, como quiera que si bien se intentó a última hora poner remedio, el remedio ha durado sólo unos cuantos días y ahora vuelven a funcionar todas las timbas y garitos con perfectísima libertad ...» (Diario, 5 de marzo de 1912, VIII, p. 2735).

Aquella interpelación al ministro de gobernación iba a desatar una larga discusión, en donde se muestra la exacta realidad de los juegos tolerados, en torno a los cuales se entreve connivencias y corrupción. Participa en el debate el propio presidente del gobierno, José Canalejas y se descubre a través de los discursos situaciones ilegales. «Hoy en Barcelona se juega, hoy en Madrid se juega. Si quiere su Señoría que los dos tomemos un coche y vayamos a La Peña, al Casino de Madrid, al Círculo de Bellas Artes, al Círculo Militar y a otros, tendrá su Señoría que denunciar el juego conmigo, y es escandaloso que en todas partes, no sólo se falte a la ley, no sólo se esté públicamente jugando, sino que haya un Estado de irritante desigualdad que concede un monopolio a determinados empresarios, que parece que son, o se supone que son, amigos políticos...» (Soriano a Canalejas, 30 de mayo de 1912, X, p. 3418).

Algunos diputados quieren salir de esa situación y que se reglamente el jue-

go —alguno apunta la posibilidad de gravarlo—. El gobierno quiere quitarle importancia, consciente de que se juega en las grandes poblaciones —en San Sebastián— en los casinos y lugares selectos, hay una tolerancia para determinados estratos sociales. La tolerancia era clasista, sin duda por el paternalismo que, como en tantas ocasiones, dominaba la sociedad española. Las cosas se solucionaron, de momento; en posteriores legislaturas vuelve a surgir esta cuestión, si bien no cambiaron los criterios. Con Primo de Rivera las prohibiciones se aplicaron y se cerraron casinos y casas de juego...

Para terminar mi breve recorrido histórico, recordaré cómo un asunto de juego fué un acontecimiento importante a finales de la segunda república —dio lugar a la caída de Lerroux y, poco después, se abrieron las elecciones que ganó el Frente Popular. En la *Historia de España* más reciente, Tuñón de Lara dedica un epígrafe especial al «straperlo» en aquel septiembre de 1935 —luego, la palabra cobraría distinto significado en las hambres de la posguerra—. Un austriaco, Daniel Strauss, por medio de cohecho consiguió autorización para implantar un juego de ruleta en San Sebastián y en Formentor. Hubo de cerrar de inmediato y, se sintió engañado, presentando reclamación al jefe de gobierno y al presidente de la república, Alcalá Zamora. Estaban implicados una serie de altos personajes del partido radical, pertenecientes al ministerio de gobernación, incluso un hijo de Lerroux, delegado de gobierno en Telefónica. Hubo remodelación del consejo de ministros, Lerroux no podía seguir siendo jefe de gobierno y fue sustituido por Chapaprieta, en un primer momento. Luego, ante el temor de que fuera Azaña en la próxima concentración en la explanada madrileña de Comillas quien destapara aquel *affaire* se dio cuenta a las cortes y se retiró, hundido el partido radical, quien había sido una figura prominente en aquellos años con la derecha en el poder...

Naturalmente, los problemas que había entonces no pueden reducirse a una concreta anécdota o a un escándalo, que conmocionó la opinión pública. Tamames resalta el clima de libertad y responsabilidad que se vivía en aquellos años, hasta el punto de caer el gobierno y deshacerse los radicales por cuestión de unos cuatro millones de pesetas. En definitiva, una situación de prohibición de juegos, con épocas de mayor o menor tolerancia, era, sin duda, camino fácil para abusos y corrupciones...

Una hipótesis final

Sólo en fechas recientes se ha despenalizado el juego y ha sido convertido en una fuente de ingresos para el Estado. El principio permisivo de la lotería —ya sin necesidad de afectación, salvo la ONCE y algún otro caso— se ha extendido a todo el conjunto. Me permito preguntar cuáles han sido las razones

para ese cambio, o mejor, intentaré una hipótesis explicativa.

Ha cambiado la moral social y hoy no se consideran tan nocivos los juegos de suerte o envite. Sin duda, pero ¿por qué y en qué sentido se ha verificado esa transformación en las valoraciones sociales? Una sociedad más permisiva, pero ¿es que los niveles de tolerancia o prohibición varían sin una orientación fija? Admito que el tiempo corre en favor de posiciones más abiertas, en una sociedad que abandona talantes campesinos, agrarios o que vive en ciudades más grandes y más ricas. Pero, por detrás, creo ver que las transformaciones sociales alcanzadas han planteado de manera distinta la actitud de los españoles ante el juego.

Cuando leemos alguna novela de la Pardo Bazán o de Galdós —realismo o naturalismo dirigido a la burguesía— percibimos de inmediato que las tragedias se centran en torno a la ruina o la pérdida de un patrimonio. Entonces se vivía —los burgueses— de las rentas de las tierras o las casas, del papel del Estado... Incluso los profesionales o los políticos, los altos funcionarios, poseen fortunas más o menos grandes. Aquellas novelas reflejan la vida en el siglo XIX y principios del XX, cuando la quiebra o la ruina destroza a sus personajes. El juego es una vía por donde puede irse al traste la hacienda familiar y conducir a la miseria a algunas personas de las clases acomodadas, que son quienes imponen los códigos de conducta.

Hoy nos hallamos en unas estructuras sociales muy distintas —al menos, la mayor parte de los españoles—. Han desaparecido las rentas agrarias al viejo estilo, sustituidas por un campesinado o unos propietarios más dinámicos; las leyes de arrendamientos urbanos han machacado las propiedades de las clases medias, de modo que se han arruinado edificios o se han vendido por pisos. En todo caso, las rentas más generalizadas son las de trabajo, como asalariados o como empresarios, tanto da para describir mi hipótesis. Por tanto, la ruina o la pérdida de un patrimonio no se mira como gran tragedia. Se puede perder en el juego una parte más o menos sustancial de los ahorros o del salario... Y este evento, no conmueve los fundamentos de la familia o de la persona. Ha desaparecido una pequeña burguesía que vive de rentas y no hay riesgo de que el juego devore su capital y cree situaciones dramáticas... Si añadimos que los mecanismos de seguridad social y pensiones del Estado de bienestar eliminan la necesidad de ahorros, podemos comprender esa nueva actitud sobre los juegos: son un esparcimiento, una forma de llenar el ocio que tiene un coste, mayor o menor. El Estado, ya sin ningún remordimiento, puede lograr establecer impuestos sobre los juegos lícitos.

Han desaparecido los patrimonios de la pequeña burguesía y, en consecuencia, no existe ya angustias ante su pérdida. Los grandes patrimonios no es fácil que se pierdan en el juego —en todo caso, no importa a la mayoría su conservación—. En épocas pasadas la burguesía supo hacer sentir a buena parte de la población que el patrimonio era fruto del trabajo y de la honradez,

que su conservación era esencial para la persona y la familia. Hoy han cambiado las circunstancias y el dominio de clase se realiza por otras vías, que no entraré a analizar. Ayer la pérdida del patrimonio era una tragedia, mientras hoy ya no existen aquellos patrimonios que servían para sostener a una familia... ¿Es extraño que ya no se conciba el juego como un vicio social o una plaga? ¿No es normal que el Estado u otras instituciones aprovechen esa permisividad para extraer impuestos sobre juegos?

Esta es mi hipótesis; su demostración exigirá recurrir a los datos de aquella y esta sociedad, cosa que no puedo hacer ahora...

ORIENTACION BIBLIOGRAFICA

Las noticias sobre el antiguo régimen han sido sacadas de Isidro Planes, *Sucesos fatales de esta ciudad y reino de Valencia*, 2 de sus 5 vols. en la biblioteca universitaria de Valencia, manuscritos núms. 456 y 457; o de las conocidas y dudosas *Memorias* de Fouché. Las leyes antiguas pueden verse en la *Novísima recopilación* o también en ediciones tardías de la *Nueva recopilación*.

La legislación más reciente, en especial la referida a lotería, puede verse en la *Colección legislativa*, o los *Diccionarios*, con sus suplementos, de Marcelo Martínez Alcubilla; su primera edición, Madrid, 1858-1862, o la cuarta de 1887, me han sido útiles. El estudio de Germán Orón Moratal, el capítulo primero, de índole histórica, de su tesis de doctorado, que puso a mi disposición me ha ahorrado esfuerzo.

Para el marco histórico, M. Tuñón de Lara, «*La Historia de España*, t. IX (1923-1939), Barcelona, 1981 y R. Tamames, *La República. La era de Franco*, 6.ª ed., Madrid, 1977.

SUMARIO

I. Introducción	III. La cesión a las Comunidades Autónomas de las tasas y demás exacciones sobre el juego
II. Delimitación de las competencias asumidas por la Comunidad Valenciana	IV. El poder tributario de las Comunidades Autónomas en materia de juego.
II.1. Competencia sobre juegos, juegos y apuestas.	
II.2. Exclusión de las apuestas mutuas deportivas benéficas.	

* Este informe ha sido elaborado en una Comisión integrada por José Cruz Lando (Director General de Tributos de la Generalitat Valenciana), Juan Martín Quigala (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario), Germán Orón Moratal (Profesor de Derecho Financiero y Tributario), Nicolás Sánchez García (Profesor de Derecho Financiero y Tributario) y Arturo Zabala Rodríguez-Pumón (Jefe del Estado). El poder y redacción del documento ha sido Germán Orón Moratal.